



Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

**VIVIENDA DIGNA ¿VERDADERAMENTE “DIGNA” PARA LA POBLACIÓN
DESPLAZADA?**

WENDY BOLENA MOLANO CARDONA
2107024

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA:
FACULTAD DE DERECHO

RESUMEN

Las víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento forzado son poseedores de unas historias de vida relacionadas con factores económicos, culturales y sociales de vecindario, donde la percepción del espacio y el ambiente genera formas de relacionarse cara a cara que permiten apropiarse desde su territorio y de una valoración simbólica y funcional del “adentro y el afuera de su casa”. El objetivo de éste artículo consiste en reflexionar y mostrar como el concepto de “vivienda digna”, proporcionada por el Estado, no supera el orden funcional de una construcción física en un espacio determinado, que no reconoce cada una de las formas de interdependencia e interrelación que caracterizan a los territorios hábitat originales de la población desplazada.

Palabras clave: Estado, vivienda digna, territorio y desplazamiento forzado.

ABSTRACT

The victims of the armed conflict in situation of forced displacement are holders of life's stories related to economic, cultural and social factors, where the perception of space and the atmosphere generate ways of face to face interaction that allow the appropriation from their territories and a symbolic and functional assessment of "inside and outside of your home." The aim of this article is to reflect and to show how the concept of "adequate housing" provided by the State, does not exceed the functional order of a physical building in each space, that does not recognize each one of the forms of interdependence and interrelation characterizing the original habitat lands of the displaced population.

Key words: State, adequate housing, territory and forced displacement.

SUMARIO. Introducción. 1. Problema Social de la vivienda digna para población desplazada. 2. Determinación del derecho a la vivienda digna como fundamental. 3. Fundamentos jurisprudenciales del derecho a vivienda como derecho fundamental por conexidad. 4. Definiciones. 4.1. Derecho Fundamental. 4.2. Derecho a la vivienda digna. 5. La vivienda digna como derecho subjetivo. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

Para abordar el derecho a la vivienda digna de las víctimas del desplazamiento interno¹ en Colombia, el cual se ha convertido en un problema social es necesario tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico esto constituye una violación múltiple de derechos humanos, por lo tanto, comenzaremos explicando lo que se entiende por desplazado:

“Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias que emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”, (art. 12, Ley 387 de 1997).

Este fenómeno social y político ha hecho que Colombia sea catalogada como uno de los países más violentos y con la mayor tasa de desplazamiento a nivel mundial. Durante los últimos 50 años según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica más de cinco millones setecientos mil colombianos han tenido que abandonar su territorio, producto del conflicto armado interno provocado por los grupos armados como paramilitares, FARC y ELN Wallensteen y Sollenberg, (2001) explican el conflicto armado como una incompatibilidad que se refiere al gobierno o al territorio en donde el uso de la fuerza armada entre dos grupos, de los cuales por lo menos uno es el gobierno de un estado y el otro un grupo formalmente organizado. Al existir una incompatibilidad ideológica entre estos grupos y el Estado o incluso entre ellos mismos por

¹ Personas o grupos de personas que han sido obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de o con el propósito de evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos [...] y que no han cruzado fronteras nacionales internacionalmente reconocidas. (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

disputas territoriales, por el control de recursos y en general por la búsqueda del poder, se presentan enfrentamientos en los que frecuentemente no se identifica a la población civil resultando esta visiblemente afectada pues se han transgredido masivamente los derechos humanos y han cometido contravenciones constantes al derecho internacional humanitario incurriendo en actos de violencia atroces como masacres, secuestros, torturas los cuales han generado una crisis humanitaria, ya que todas estas vulneraciones provocan la movilización de las comunidades o de gran parte de estas al no tener otra opción pues es evidente el riesgo para sus vidas y su integridad, hecho derivado de las constantes intimidaciones a través del poder de facto ejercido, además como consecuencia deben despojarse de sus viviendas lo cual es aprovechado por los grupos mencionados anteriormente, con el fin de adquirir la tierra y tomar el monopolio de estas, generando una transgresión de las condiciones mínimas para sobrevivir y la garantía de otros derechos que son de especial relevancia para el desarrollo de la persona tanto a nivel individual como social repercutiendo directamente en su dignidad.

El desplazamiento se podría considerar como una de las más aberrantes expresiones de este conflicto pues deja como consecuencia un desequilibrio en el orden demográfico y un déficit de en la distribución del derecho a la vivienda, particularmente en el compartimiento de la seguridad jurídica, ya que por la globalización y su tendencia a concentrar el poder económico y político en pocas manos, necesariamente expulsa a estas minorías poblaciones del disfrute de la economía y de los beneficios que esta genera; por tal motivo las personas que adquieren esta condición² se ven obligadas a migrar hacia el interior del país por razones vinculadas a la subsistencia, seguridad, y en general el derecho al mínimo vital, es decir, “el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos, que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno [....]” (Celi. 2011, p.1.), pues debido a las transformaciones demográficas estas zonas se

² Condición de desplazamiento: aquella persona que solicite tal reconocimiento mediante lo establecido en el artículo 32 de la ley 387 de 1997 siendo un requisito para tener acceso al apoyo del Gobierno, por lo cual requiere de una certificación formal como persona desplazada. Aclarando que este requisito es solo una solemnidad ya que dicha condición se tiene desde el momento en que se obliga a la persona a salir de su lugar de residencia habitual. Sentencia T-327 de 2001 Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

han convertido en lugares de destino de la sociedad, donde se concentra el poder, la riqueza, los adelantos tecnológicos, las infraestructuras, los niveles más altos de educación y salud además se considera que allí las entidades oficiales ejercen una mayor presencia o un mayor acercamiento a la población dado que se ha mantenido un concepto de descentralización relativa de la organización estatal pues se considera que el poder y la protección del estado nunca ha llegado a las zonas más apartadas del país por lo cual el poder ha sido tomado por actos ilegítimos mostrando de esta manera la falta de control y protección por parte del gobierno.

La constitución Política de Colombia de 1991 reconoce, en su artículo 51, el derecho a la vivienda digna que asiste a todos los colombianos, así:

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

Así, la carta Fundamental colombiana impone como reto a las autoridades estatales lograr que todos los colombianos lleguemos a gozar de una vivienda digna, para lo cual les ordena “fijar condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho; promover planes de vivienda de interés social; promover sistemas de vivienda CON FINANCIAMIENTO a largo plazo” a través de la coordinación de diferentes orbitas sociales como el sector bancario, el sector de la construcción y por supuesto, como siempre en medio de todas las relaciones humanas, el sector jurídico. Siendo vivienda digna un derecho programático, fin del Estado, reconocido por la constitución Política, tanto legislador o el ejecutivo como el juez deben intervenir para llegar a su concreción³.

De igual forma se establece dentro de la Constitución que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, lo cual permite entrever que no es necesario tener un amplio conocimiento de las leyes para identificar qué el gobierno está obligado a brindar programas de acuerdo con las

³ Para más información consúltase: Corte Constitucional. Sala Plena (1999). Sentencia C-747. Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, Bogotá.

capacidades de acceso de cada familia y que de una u otra forma el estado debe garantizar políticas públicas que permitan a toda la población la posibilidad de tener un lugar donde desarrollar su libre personalidad. Podemos observar que en Colombia las leyes que benefician a los diferentes campesinos, desplazados, personas con bajo nivel académico, familias en estado de pobreza absoluta, son para estos sectores de la población un tema poco investigado.

Cabe resaltar que estas políticas públicas se han ido ajustando con el fin de beneficiar a la población en general sin que cumpla alguna de las características antes mencionadas, si no que por el contrario existiera igualdad al momento de brindarle el derecho a cualquier tipo de persona con necesidades diferentes y que por un motivo no han podido adquirir su vivienda propia y digna; por esta razón muchas leyes que tratan de vivienda, beneficios y oportunidades otorgados por el gobierno son un tema poco usual en la sociedad, lo cual ha trascendido en el sentido que los hogares con capacidad de acceder a los diferentes programas de ahorro y crédito no acuden a las convocatorias realizadas por las diferentes entidades del gobierno, en parte por desconocimiento del tema o porque algunos requisitos solicitados para ciertos programas son de difícil obtención.

Lo anterior mencionado hace parte de una realidad que vivimos la mayoría de personas con hijos o que somos madres o padres cabezas de hogar y buscamos una vivienda de interés social para acceder fácilmente a las tan anheladas casas que entrega el gobierno, pero lo que no sabemos es que al momento de informarnos nos piden ciertos requisitos los cuales son difíciles de cumplir por X o Y motivo, y es ahí donde dejamos de confiar en esas “ayudas” que son brindadas por el Estado, y perdemos las esperanzas de conseguir una de las metas más importantes para nuestro hogar. Esta afirmación la podemos basar de acuerdo con la Corte Constitucional, Sala Tercera (2017). Sentencia T-035, Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo, tutela interpuesta por la señora Luz Omaira Gaitán Parrado, quien fue seleccionada como beneficiaria del programa de vivienda de interés prioritario, entre el cual se encuentra el proyecto “Madrid y Trece de Mayo”, interpuso acción de tutela solicitando la protección de su derecho fundamental al debido proceso y a la vivienda digna y pidiendo que se le conceda financiación para cumplir con el aporte familiar.

De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia y con la evidencia probatoria que obra en el expediente, es posible concluir que: (i) la señora Luz Omaira Gaitán Parrado se presentó al programa de vivienda de interés prioritario “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, entre el cual se encuentra el proyecto “Madrid y Trece de Mayo”; (ii) mediante la resolución No. 483 de 2015, la señora Gaitán Parrado fue seleccionada para ser beneficiaria de una vivienda de interés prioritario en el “Madrid y Trece de Mayo”; (iii) después de ser seleccionada debía realizar un aporte de \$6.000.000 como contribución para la construcción de su vivienda y como fuente de financiación del proyecto; (iv) la accionante le solicitó a la Cooperativa Financiera CONFIAR un préstamo para poder realizar el pago correspondiente, sin embargo el crédito le fue negado por cuanto “no cumplía con las políticas aprobadas por la Cooperativa, por mal hábito de pago”.

La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política - artículos 86 y 241.9 - y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 - artículos 31 a 36 -, así como en virtud del Auto del 30 de agosto de 2016, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Ocho de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia. Por lo que se decidió; revocar el fallo del 10 de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio y, en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al debido proceso, a la personalidad jurídica y a la igualdad.

Igualmente decidió ordenar a la Cooperativa Financiera Confiar que estudie nuevamente el caso de la señora Luz Omaira Gaitán Parrado atendiendo a las razones expuestas en esta sentencia. En dicho estudio le deberá explicar a la accionante las razones para conceder o negar el préstamo solicitado. Para realizar lo anterior, Confiar contará con un plazo perentorio de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia y una vez realizado, deberá enviarlo de manera inmediata al juez de primera instancia, a la Gobernación del Meta, a la Alcaldía de Villavicencio y a Villavivienda EICE, para que tomen la decisión correspondiente.

De igual manera, es importante resaltar la carencia de participación por parte del Gobierno Nacional y la ausencia de cooperación internacional para el manejo de esta problemática que no encuentra más que un pequeño reconocimiento jurídico en momento en que se brindan una minúscula ayuda de atención humanitaria y estabilización socioeconómica mediante la implementación de pequeños subsidios a la población desplazada por la violencia,⁴ la cual por su condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad⁵ se encuentra amparada por la Constitución e impone al Estado la obligación de protegerlas, no obstante dada la poca inversión económica, el alto índice de corrupción y el elevado número de víctimas la aplicación a este precepto constitucional se ha dado a través de escasas políticas públicas las cuales se encuentran supeditadas a los remanentes de la asignación de recursos que como se había mencionado anteriormente son aminorados por los funcionarios corruptos de estas entidades, sin embargo a pesar de estas circunstancias extrínsecas por parte de los malos gobernantes dichas políticas tratan de preservar aunque sea en un mínimo sentido las garantías fundamentales y lograr el mejoramiento progresivo de las condiciones mínimas de existencia para estas personas, ofreciendo de esta forma sólo una solución temporal en tanto el individuo logra restablecer los entornos necesarios o básicos para la subsistencia propia y familiar, pues dichos “beneficios” otorgados por el gobierno se dan en un hábitat precario e impropio para el desarrollo humano ya que no garantizan sino la función primaria de vivienda mas no la vivienda digna que deberían tener.

1. PROBLEMA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA

¿Realmente el Estado cumple con los requisitos legales al entregar viviendas dignas para satisfacer las necesidades propias y básicas de la población desplazada?

⁴ Secretaría de Integración Social dentro de su misionalidad ofrece subsidios a esta población dentro de cada Localidad en las que se encuentran estas personas, con el fin de proteger a la población más vulnerable ofreciendo estas ayudas como bonos, comedores o subsidios de canasta familiar.

⁵ Para más información consúltese: Corte Constitucional. Sala Primera (2013). Sentencia T-239 Magistrado Ponente María Victoria Calle Correa, Bogotá.

Es necesario profundizar en la problemática social que actualmente se presenta a nivel nacional en cuanto a la vivienda para la población que se encuentra en condición de desplazamiento, por lo que será necesario abordar esta temática desde diferentes enfoques para visibilizar las diferencias tanto territoriales como sociales que indirectamente repercuten en esta.

Con el paso del tiempo se han generado diversos conceptos formales de territorio, pues comúnmente resulta ser asociado a una concepción que hace referencia a un espacio geográfico determinado y al mismo tiempo es “ligado a la idea de dominio o apropiación, que un determinado grupo social ejerce en una dimensión espacio - temporal” (Saavedra, 2010, p.3). Con relación a este tipo de concepto, Geiger (1996) define como territorio “una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social; contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento” (Citado en Montañez y Delgado. 1998. p. 124).

Sin embargo con la globalización y los factores de interacción humanos y espaciales se ha realizado una evolución a este concepto haciendo que no se pueda entender el territorio sin la sociedad, por este motivo lo que se consideraba esencialmente como un lugar geográfico pasa a ser un espacio dinámico; como lo considera Santos (1984) identificándose como un conjunto indisoluble en donde convergen objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales y la vida que los colma y anima (citado en Rodríguez, 2010).

Es así como Montañez y Delgado (1998. p. 122-123) plantean que para analizar el territorio se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad⁶.
El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado.

⁶ "Conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social, o Estado, los diferentes grupos sociales [...]" (Correa. 1996. p. 252). Montañez y Delgado (1998. p. 122-123)

2. En el espacio ocurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto.
3. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geo social es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial.
4. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de la acción ciudadana sólo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades.

Es así como el concepto de territorio repercute de manera directa sobre el fenómeno del desplazamiento, debido a que las principales víctimas son las familias campesinas, quienes han transcurrido la mayor parte de sus vidas en un determinado lugar en el que muchas veces ya están sometidos a condiciones precarias de vida, pero que han logrado sobrellevar, considerando su lugar de residencia un escenario con diversas significaciones como por ejemplo las relaciones sociales, políticas, efectivas y la protección de cada integrante, lo cual hace que se cree un espacio dinámico pues en este se lleva a cabo la formación de vínculos, además de fijar tradiciones, reglas, y un esquema valorativo, que conlleva en una dimensión individual a la creación de una personalidad tomando como referencia los criterios morales que la sociedad se ha encargado de establecer en dicho lugar y en una dimensión colectiva el origen de una identidad local con características especiales, fortalecidas con el transcurso del tiempo que hace que ese territorio se convierta en un espacio único para cada uno de los que en él habitan.

Sin embargo esta se ve interrumpida y vulnerada en el momento que dichos habitantes se convierten en víctimas de un desplazamiento, generalmente masivo⁷ ya que tienen que

⁷ “Aquel que se configura de manera conjunta, respecto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas” (Decreto 2569 de 2000, art 12).

abandonar forzosamente su “lugar de origen”, hallando refugio en lugares ajenos y desconocidos, que sin lugar a dudas produce un desarraigo cultural y social con cambios drásticos en el estilo de vida además de la pérdida de ingresos, de empleo y de oportunidades económicas pero dadas las circunstancias deben adaptarse para suplir las necesidades impuestas por los altos costos de vida; lo que en realidad es una limitación pues a pesar del despojo de parte de su identidad, el desplazado buscará actividades similares a las que solía llevar a cabo en el campo (esencialmente agrícolas) y al migrar forzosamente (movimiento de una persona o grupo de personas, en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas, que se desplazan de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. (Organización Internacional para las Migraciones, Agencia para las Migraciones, Misión en Colombia) a zonas urbanas es casi imposible realizarlas, por consiguiente esta población es relegada y difícilmente podrá desarrollarse en zonas nuevas ya que no se encuentran preparados para entrar a hacer parte de ese entorno pues allí regularmente suelen tener diferentes costumbres lo cual hace más difícil la adaptabilidad⁸, a pesar de esto migran hacia estos sitios considerados como lugares de destino con la esperanza de encontrar allí mejores condiciones de vida que pueden ser reales o simplemente ilusorias teniendo en cuenta que no siempre sus expectativas son ciertas, además como agravante a esta situación la mayoría de las personas desplazadas son mujeres y menores de edad, población que tradicionalmente ha sido desprotegida, siendo susceptible a vulneraciones tanto en materia de derechos como de principios basados en la dignidad humana tales como el principio *ius cogens* es derivado de la fuerza vinculante del Derecho Internacional Humanitario, “[...] De ahí que su respeto sea independiente de la ratificación o adhesión que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen dichos principios”.

⁸ “La llegada de las personas en condición de desplazamiento impacta no sólo sus propios imaginarios, sino los existentes en estos nuevos territorios; se consolida la dimensión de lo ‘extraño’ que produce una interacción siempre incongruente [...], que marca distancias en las prácticas, los discursos y las imágenes sociales, logrando escindir la vida cotidiana entre un mundo de confusión y otro de caos” (Palacios, 2004: 47).

El Derecho Internacional Humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento jurídico. Corte Constitucional. Sala Plena. (1992). Sentencia N.º C-574. Magistrado Ponente. Ciro Angarita Barón, el principio de neutralidad de la asistencia humanitaria, el principio de normalidad de la vida de la población civil en lo máximo posible en el marco de un conflicto armado, el principio de protección por parte del Estado de las personas que habitan en su territorio (Ramírez, 2004, p. 5).

El territorio tiene una vinculación directa con la dignidad humana definida en la Corte Constitucional. Sala Novena (1993). sentencia T-124 Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa como “un atributo de la persona y, en cuanto tal, todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión específicamente humana.” Cabe aclarar que cuenta con dos acepciones, como principio y como derecho, para el contexto sobre los desplazados, serán utilizadas las dos nominaciones ya que tienen como fin lograr las condiciones para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de esta, los cuales han sido identificados por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 881 de 2002 Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett, como: la autonomía individual, las condiciones de vida cualificadas, y la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona; en cuanto a los tres ámbitos es evidente la vulneración para una persona desplazada, teniendo en cuenta que su percepción de la vida cambia abruptamente por las circunstancias sociales a las que deben enfrentarse.

2. DETERMINACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA COMO FUNDAMENTAL

En un Estado Social de Derecho, la comunidad política debe brindar un trato especial, preferencial, a aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad y que por dichas circunstancias están disminuidos de participar en igualdad de condiciones, en la adopción de las políticas públicas establecidas por el Estado y que resulten aplicables.

La Corte Constitucional ha sugerido que, en ciertas circunstancias, el derecho a la vivienda adecuada puede ser un derecho fundamental, susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. En la sentencia T-172/97⁹ analizó la solicitud de tres hermanas, dos de ellas ancianas, de no ser desalojadas de la vivienda que habitaban. Las mujeres habían trabajado durante varios años como empleadas domésticas en una casa de familia y, una vez fallecidas las personas para las cuales prestaban sus servicios, siguieron viviendo allí.

Sin embargo, una de las herederas de los empleadores, tras terminar y liquidar el contrato de trabajo correspondiente, solicitó que abandonaran la casa en la que habitaban. En este caso concreto sentencio: En el caso sub-examiné, puede pensarse que las demandantes de la tercera edad son personas que realmente están en situación de indefensión respecto de la protección de su derecho fundamental a gozar de una vivienda digna, derecho reconocido expresamente por el artículo 51 de nuestra Carta Política, y que es el que ellas reclaman por la vía de la tutela, puesto que lo que solicitan es permanecer en la vivienda que actualmente ocupan y que es la de sus antiguas patronas. La Corte añadió que el derecho fundamental a la vivienda digna, debido a la situación de indefensión de las demandantes, era exigible, pero no frente a la heredera de la casa, quien pretendía desalojarlas, sino frente al Estado.

Sin embargo, la sentencia indicó más adelante: “No existe entonces propiamente, en el caso bajo examen, un derecho subjetivo, ni una acción directa de carácter general, para demandar del Estado, en cualquier situación, la satisfacción del derecho a la vivienda digna”.

Con base en ese argumento, la Corte denegó la tutela al derecho a la vivienda digna. Sin embargo, consideró posible que, en virtud del principio de solidaridad y de la situación de indefensión, se exigiera del Estado la atención a las necesidades mínimas de subsistencia de las dos demandantes mayores de edad, por medio de las instituciones de beneficencia pública.

⁹ Para más información consúltese: Corte Constitucional. Sala Sexta. (1997). Sentencia T-172 Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, Dora Helena Aguilera, en su propio nombre y en nombre y representación de las señoritas Carmen Rosa y María Eulalia Torres Sosa, interpuso la presente acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho a la igualdad, presuntamente vulnerado por la señora Beatriz Acevedo de Ordóñez, quien desea sacarlas de la casa de habitación

Para concluir sobre el carácter de derecho fundamental que le ha dado la Corte Constitucional a este derecho, es pertinente mostrar el enfoque de identificación que esta Corporación le dio a la vivienda digna años atrás. Para tal efecto se relacionan en primer lugar los derechos que justificaron la protección de este derecho en esta dimensión fundamental, tomando con exactitud el caso que dio origen a este pronunciamiento, y finalmente quedarán circunscritos en este texto unos interrogantes que particularmente no serán considerados aquí, pero que permitirán al lector abordar con posterioridad otros productos que continúen generando inquietudes en cuanto al poder que nos asiste: exigir la protección y garantías de los derechos fundamentales.

3. FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES DEL DERECHO A VIVIENDA COMO DERECHO FUNDAMENTAL POR CONEXIDAD

La Corte Constitucional ha expuesto en su jurisprudencia mediante la figura de conexidad el peligro al que están expuestos los derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana y la igualdad, entre otros. Pero esta tendencia tampoco es de garantía, porque los derechos no pueden seguir siendo objeto de acomodo a circunstancias e intereses particulares. En decir, el derecho a la vivienda no puede seguir dependiendo de este factor, que no hace más que entorpecer e imposibilitar su ejercicio y realización efectiva. Se considera que el derecho a la vivienda es un criterio definitorio de contenido esencial que implica el bien común como condición de aseguramiento de una de las necesidades humanas del Estado social.

La Corte Constitucional ha desarrollado la tesis según la cual ciertos derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales y, por consiguiente, pueden ser protegidos mediante la acción de tutela, si tienen conexidad con algún derecho fundamental. Lo anterior significa que, dadas las circunstancias concretas de un caso, la vulneración del derecho económico, social y cultural de que se trate, implica, a su vez, la vulneración de un derecho fundamental¹⁰.

¹⁰ Para más información consúltase: T-406/92 Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón ha señalado: Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como fundamentales. Sin embargo, su conexión con otros derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de

Así la Sentencia T-569 de 1995, define que el derecho constitucional a la vivienda digna no es un derecho fundamental, el cual solo puede ser objeto de protección judicial mediante las acciones y los procedimientos judiciales que establece el legislador, claro está, diferentes de la acción de tutela. Con respecto a la fundamentalidad de este derecho y debido a su naturaleza, la Constitución Política de 1991 establece en su artículo 94 que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros, que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

La interpretación que ha presentado la Corte en lo que concierne a algunos seres de especial protección, no crea la obligación de recurrir al elemento de conexidad con otro derecho de rango fundamental, pues prácticamente un derecho social de esta naturaleza demuestra el valor que personifica al individuo en virtud de la relación entrañable que tiene con sus atributos inalienables, como la dignidad humana, la vida, el mínimo existencial y la igualdad, entre otros.

Dicho lo anterior podemos concluir que la Corte al sostener que el concepto de vida no se limita solamente a la protección de una mera existencia biológica, sino que debe fundarse en el principio de la dignidad humana que se materializa sin duda en el goce de una vida digna. Es precisamente por esa razón que se ha determinado que el derecho a la vivienda en conexidad con el derecho a la vida o a la dignidad humana, garantiza su protección de modo que asegura la calidad de vida del individuo en todos los aspectos, esto es, en los casos que se compromete la posibilidad que le asiste a todas las personas de desarrollar dignamente las facultades inherentes al ser humano.

Es por ello que, frente a este factor de conexidad, con el que se ha pretendido demostrar la parcialidad e irracionalidad en la que están subsumidos los derechos sociales fundamentales, escapa a cualquier intento de reconocimiento iusfundamental, pues la utilidad práctica de tal interpretación ha sido cuestionada hasta por la propia jurisprudencia. La Sentencia T-016 de 2007 establece una crítica acertada, señalando que se muestra artificioso expresar la exigencia

una interpretación global entre principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos económicos sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión judicial.

de conexidad tratándose de derechos fundamentales, los cuales tienen una connotación prestacional incuestionable.

Al estar relacionados con la posibilidad de elegir el proyecto de vida, con las condiciones necesarias para desarrollarlo y con la integridad física y moral; implica que los lineamientos por los cuales la persona giraba en torno ya no se seguirán de la forma como se tenía establecido, en pocas palabras, no se podrá vivir como se quería, por consiguiente la autonomía mencionada que a su vez debería comprender una libertad con el mínimo de restricciones posibles, pero está supeditada tanto por el Estado al no brindar los requerimientos en lo que se refiere a seguridad y por los particulares, representados en los grupos armados, que con acciones violentas modificaron y obstaculizaron un goce efectivo del derecho fundamental a la vida ya que como lo menciona la sentencia T- 444 de 1999 “este derecho no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna” de esta forma se vulnera la dimensión social, la integridad física y moral de los desplazados, pues ciertos beneficios que le permiten ser parte activa y por lo tanto desarrollarse normalmente en la sociedad se verán limitados dado que se encuentran en condición de vulnerabilidad, al impedir acceder a garantías mínimas que le permitan la realización de derechos económicos sociales, culturales y la adopción de un nuevo proyecto de vida; exclusión, el desplazado sufre una ruptura de los vínculos que lo unen con su comunidad de origen de modo que se dificulta la generación de recursos para sobrevivir y las posibilidades con las que ahora en adelante se cuentan, ya sea generadas por ellos mismos puedan brindarse para proveerse de elementos básicos o por parte del Estado, pero estas son bastantes escasas, llegando a ser casi nulas; y marginalidad, como la situación en la que se encuentra el desplazado al hacer parte de un nuevo escenario en el que por ser una minoría en comparación al resto de población que habitualmente se desenvuelve en dicho territorio, no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social¹¹ que si bien están prohibidas, podría decirse que son la evidencia de la afectación que se les produce desde el momento que son apartados de sus tierras en las condiciones más aberrantes.

¹¹Para más información consúltese: Corte Constitucional. Sala Octava. (2006). Sentencia T-585 de Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá.

De igual forma al ser la dignidad sobre la cual se basa el sistema jurídico, se vulneran ciertos derechos como: a) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; b) el derecho a escoger el lugar de domicilio; c) libre desarrollo de la personalidad; d) el derecho a la unidad familiar; e) derecho a la salud, f) derecho a una vivienda digna; g) derecho a la seguridad personal; h) derecho a la libertad de circulación; i) derecho al trabajo; j) derecho a una alimentación mínima; k) derecho a la educación; l) el derecho a la paz; m) derecho a la igualdad; n) derecho a la integridad personal, lo que implica la violación de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, el artículo 3° Común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra¹².

Continuando con el desarrollo del tema hay que tener en cuenta que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966 —DESC—, la vivienda entra a ser considerada un bien vital para el desarrollo de las personas.

4. DEFINICIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIVIENDA DIGNA

4.1 DERECHOS FUNDAMENTALES

Diferentes bienes jurídicos son reconocidos y consagrados en artículos de la Constitución de diverso valor normativo. No todos los derechos y las libertades tienen carácter de fundamentales, ni todos son susceptibles de una protección constitucional por vía de tutela. Este es el caso de los derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos el derecho a la salud, por ejemplo, los

¹² Para más información consúltase: Consejo de Estado. (2010). Sentencia 1994-00071 del 18 de febrero Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá.

cuales por depender para su realización de la intervención legislativa no pueden hacerse exigibles de manera inmediata. Excepcionalmente, en relación con los niños o en caso de comprobarse conexidad directa con otros derechos fundamentales, el derecho a la salud adquiere naturaleza fundamental y por ende posibilidad de ser tutelado.

Los derechos que son fundamentales por aplicación directa e inmediata son todos aquellos derechos de libertad e igualdad formal, y, además, ciertos derechos de igualdad material que se relacionan con la vida y la dignidad humana. Su carácter de derechos de aplicación directa se deriva de su naturaleza general valida en todos los casos.

Mencionado lo anterior podemos decir si, el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de los que están consagrados en nuestra constitución política.

De acuerdo con lo anterior observamos que para las Altas Cortes es claro que el derecho a la vivienda digna *no* es un derecho fundamental como tal, aunque puede ser protegido por vía de la acción de tutela, ya que su vulneración o desconocimiento podría acarrear la violación a la dignidad humana del hombre, su derecho a la vida, y combatiría con la protección especial que el Estado debe otorgar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Al respecto se han desarrollado diferentes fallos; por ejemplo, llama la atención la Corte Suprema de Justicia¹³, que, en Sala de Casación Penal, cita expresamente a la Corte Constitucional y a manera de recopilación frente al tema planteado¹⁴.

4.2 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

El derecho a la vivienda digna es, pues, un derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las

¹³ Para más información consúltase: Corte Suprema, Sala de Casación Penal (2002), T-0566 Magistrado Ponente Fernando E. Arboleda Ripoll,

¹⁴ “...el derecho a la vivienda digna no constituye derecho fundamental, y por tanto no puede ser susceptible de protección inmediata por vía de acción de tutela; se trata de un derecho asistencial de tipo económico, que se enmarca en la obligación que tiene el Estado de promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda (artículo 51 Constitución Política de Colombia)

entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio.

Para tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de las acciones establecidas para tal fin. Con este corto estudio compartimos lo planteado por la Corte, y podemos agregar que el derecho a la vivienda digna reconoce unas circunstancias que permiten a la persona acceder a una vivienda que se encuentre acorde con su valor como ser humano, es decir, que ostente una calidad necesaria para proteger la dignidad de las personas que conformen el núcleo familiar que pretende asentar su familia en un determinado lugar.

Es por esta razón que no es posible exigir de manera directa al Estado el cumplimiento del derecho a la vivienda digna y que, dado su carácter de no fundamental, permite un desarrollo a largo plazo, limitando su eficacia en el tiempo, y su efectividad a la capacidad del gobierno de presentar caminos que hagan posible la adquisición de vivienda. Entendido lo anterior, se puede ir apreciando, de forma preliminar, que la jurisprudencia constitucional es clara y suficiente al manifestar que, si bien el derecho objeto de estudio no detenta el carácter de fundamental, el Estado, en cumplimiento de los fines fijados por nuestra Carta Política, debe proporcionar las medidas necesarias para garantizar a los colombianos la adquisición de la vivienda bajo unas condiciones de igualdad y unos parámetros legales específicos

La vivienda podría definirse como “la posibilidad real de disponer de un lugar que le permita al individuo y a su familia usarlo como habitación, con espacio suficiente para vivir, en el cual

pueda aislarse de su contorno social si lo desea, dotado de infraestructura y servicios básicos adecuados” (Mocaleano, 2006, p. 43).

Pero según ha establecido la Corte Constitucional la vivienda es un derecho prestacional¹⁵, es decir que, aunque el Estado debe desarrollar los mecanismos para garantizar su protección, su cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos para tal fin por lo que se ha realizado por parte del gobierno una “interpretación” en la cual se tiene en cuenta la gran disposición de recursos que esto implicaría, es decir, se ha limitado a considerar como una simple obra arquitectónica humana, que cumple las necesidades básicas del hombre actual, con un mínimo de confort, esto afecta y cambia totalmente la función básica de la vivienda que es la de proporcionar un espacio seguro y confortable para resguardarse brindando a su vez la mayor cantidad posible de soluciones ingeniosas que favorezcan el bienestar de las personas y la deja sólo como un espacio que no cumple con los requisitos mínimos y necesarios para el desarrollo adecuado de la calidad de vida humana; este, al ser un derecho de carácter fundamental no puede desconocer ya que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y confort o en palabras de la Corte, se trata de un derecho que guarda una estrecha relación con la dignidad humana, es una necesidad básica que debe ser satisfecha y que asegura y protege a los individuos de las inclemencias climáticas, pero que en igual medida suple las necesidades de privacidad para cada integrante del núcleo familiar.

La protección brindada por el Estado Social de Derecho¹⁶ en que nos encontramos tiene el propósito de alcanzar la equidad para todos los ciudadanos y surge de esta manera el compromiso

¹⁵ Robledo, P. (2010) El derecho a una vivienda digna en el marco de las competencias municipales de ordenación del territorio. Revista Derecho del Estado, (24), p. 207-231. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/3376/337630234010.pdf>.

¹⁶ El Estado social de derecho, es aquel instituido por el constituyente colombiano, y es el que “[...] define la naturaleza del régimen político, económico y social, identificándose con los valores y fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución. La superación del Estado de derecho como garantía de la libertad y de la igualdad formal tiene lugar en el Estado social de derecho mediante la acentuación de los elementos finalistas que guían la actividad estatal administrativa y política. La persona humana y su dignidad

de que el mismo se encuentre al alcance de todos, en toda circunstancia de espacio y región, además de que genere las soluciones más adecuadas para garantizar que el ser humano tenga en su vivienda un primer factor para la construcción de su propia dignidad y la de su familia.

Aunque se ha ubicado la construcción de vivienda como uno de los parámetros relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población ya que se ha dado una inadecuada distribución física de la vivienda, lo que afecta a un alto número de colombianos, pues se estima que el 31% de los hogares en Colombia debe compartir el espacio de la vivienda o los servicios con otras familias; el 15% de los hogares no cuenta con servicio sanitario; el 10% de los mismos no dispone de un recinto para ducharse y un 11% tiene problemas para cocinar por no contar con un espacio separado para el efecto (Mocaleano, 2006, p. 44). Según la ONG Techo, más de 230.000 personas viven hoy en asentamientos informales (suburbios) en Ciudad Bolívar, Usme y Chapinero. El informe también reveló que el 38 % de estas personas construyeron sus viviendas invadiendo el territorio, es decir, sin ser propietarios de la tierra y sin infraestructura de servicios públicos. Las más de 230.000 personas equivalen al total de la población de una ciudad como Riohacha (La Guajira) o Venecia (Italia). Lo que más preocupa de los datos revelados por Techo es que el 46 % –la mitad o casi la mitad– de las personas de estos asentamientos, son niños de hasta 10 años. La directora de la organización, Daniela Carvajalino, asegura que esta realidad “es un desafío para el nuevo alcalde de Bogotá tras las elecciones de este 25 de octubre”¹⁷.

5. LA VIVIENDA DIGNA COMO DERECHO SUBJETIVO

A pesar que la dignidad en una vivienda sea un concepto subjetivo pues es claro que depende de las condiciones económicas de la persona y de los gustos decorativos según ha establecido la

constituyen el máximo valor de la normatividad constitucional, cuyo reconocimiento conlleva importantes consecuencias para el sistema de relaciones económicas y sociales”. Sentencia T-3038 de 1992 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz

¹⁷ ONG Techo, (2015) 230.000 bogotanos no tienen una vivienda digna, recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-techo-dio-conocer-las-cifras-de-pobreza-en-los-barrios-de-la-capital/446677-3>.

Corte Constitucional en concordancia con la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas el derecho a la vivienda para ser reconocido como tal, sin importar si el espacio en donde se materializa es propio o ajeno, debe permitir a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida¹⁸, por lo que debe procurarse que tenga como componente fundamentales:

- a) Seguridad jurídica de la tenencia
- b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
- c) Gastos soportables
- d) Habitabilidad
- e) Asequibilidad

Además en palabras de la Corte Constitucional se debe propender porque la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud, que se le facilite el acceso a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes y que la ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes¹⁹ dando lugar de esta manera a que se dé un desarrollo integral dentro de la comunidad.

El derecho a la vivienda es por tal razón un derecho básico que le corresponde a todas las personas, por el sólo hecho de pertenecer al género humano. En Colombia este derecho aparece negado o limitado (o por lo menos no totalmente provisto) para la mayoría de los habitantes, y en la medida en que se descende en la escala socioeconómica se hacen más profundas las precariedades habitacionales. Este derecho se puede definir como la posibilidad real de disponer de un lugar que le permita al individuo y a su familia usarlo como habitación, con espacio

¹⁸ Para más información consúltase: Corte Constitucional. Sala Séptima. (2012). Sentencia T- 245 Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Bogotá.

¹⁹ Para más información consúltase: Corte Constitucional. Sala Sexta. (2006). Sentencia T- 585 de Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá.

suficiente para vivir, en el cual pueda aislarse de su contorno social si lo desea, dotado de infraestructura y servicios básicos adecuados y situado convenientemente respecto del sitio de trabajo; todo ello a un precio razonable²⁰.

CONCLUSIONES

Para finalizar ya que se ha hecho un recorrido teórico para abordar el derecho a la vivienda digna el cual se encuentra constitucionalmente amparado en el Art. 51 de la Constitución Política de Colombia como se ha mencionado anteriormente, y al estipular que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” por lo cual debe cumplir con lo establecido sin olvidar las condiciones que la hagan apta para ser habitadas además debe lograrse dentro de parámetros económicos que sean posibles para cada uno, y en un espacio que no genere conflicto ni para la persona ni para el ambiente.

A juicio de la Corte, en la sentencia T-530 de 2011 el derecho a la vivienda digna es un derecho de rango constitucional, de configuración legal, protegido por el derecho internacional y que la doctrina y la jurisprudencia tradicionalmente han clasificado dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, el carácter abstracto de este derecho no puede llevar a la negación de su fundamentalidad, es decir, el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental para las personas desplazadas por la violencia que puede ser protegido mediante acción de tutela, ya que es una obligación de las autoridades:

- (1) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo;
- (2) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado

²⁰ Moncaleano A, (2006). Hábitat y el derecho a la vivienda digna. 1a. ed. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, Pontificia Universidad Javeriana. Ed. 21. P.43.

que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas;

(3) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas;

(4) en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.; y

(5) eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado, entre otras; No obstante, cosa distinta es que las prestaciones que de él se derivan deben ser definidas por los poderes públicos competentes para ello.

Es de vital importancia aclarar que los parámetros establecidos por el Estado mediante determinadas políticas públicas, en las cuales se estipulan los requisitos para adquirirla y los parámetros bajo los cuales se construirán dichas viviendas para los desplazados, se ve materializado a través de la implementación de un subsidio de vivienda, el cual podría ser definido como “Un aporte estatal que se otorga por una sola vez al beneficiario”. (Gobierno Nacional, 2004), no obstante en este caso, no son entregadas a cabalidad, además la calidad de las viviendas entregadas por parte del estado a estas comunidades minoritarias y vulnerables en Colombia se ven cuestionadas puesto que presentan problemas de estructura y de disposición de espacio así como de acceso a los servicios públicos, que son precariedades que afectan la comodidad, funcionalidad y habitabilidad²¹ de los residentes o beneficiarios; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que para que una vivienda se habitable, esta debe reunir varios elementos : espacios adecuados para sus habitantes, protección contra vectores de enfermedades y contra riesgos estructurales.

En concordancia con lo anterior podemos notar que los subsidios de vivienda entregados por el estado no son más que eso, pues en su mayoría estos no cumplen con las condiciones necesarias

²¹ “Conjunto de características y virtudes que reúne el bien para que sea ocupado en condiciones de dignidad indiscutible”. Conrado R. Defensor Delegado de Política Pública de la Defensoría del Pueblo

para ser considerados como una vivienda digna ya que simplemente otorgan a sus ocupantes un espacio desprovisto del arraigo cultural en realidad ellos buscan.

Es en estas circunstancias en las que se ve reflejado de manera notoria el problema que enfrentan las instituciones carentes de recursos al momento de brindarle ayuda a los desplazados como los individuos pertenecientes a un grupo minoritario, el cual necesita reintegrarse a un entorno socioeconómico y cultural intentando ser parte activa del mismo, sin embargo al no encontrarse una solución a dicho dilema se ve afectada de manera directa nuevamente la utilización efectiva de los cuantiosos recursos dispuestos tanto para atención humanitaria a desplazados como para políticas de “retorno a tierras”.

Con relación a la población afectada por el desplazamiento, las personas que asumen esta calidad al ser considerados como sujetos de especial protección constitucional dada su particular situación de vulnerabilidad. En este sentido, la jurisprudencia ha encontrado que dentro de los derechos fundamentales que le son vulnerados en forma masiva y sistemática a este tipo de población, se encuentra el derecho a la vivienda digna²², en tanto “tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas de lo contrario tienen que vivir a la intemperie”.

En consecuencia, se ven abocados a exigir el cumplimiento de este derecho, que resulta convirtiéndose en fundamental por el principio de conexidad²³ ya que el estado no tiene capacidad para cumplir cabalmente con la seguridad de estas personas y debe someterse a la entrega de viviendas en compensación por su inoportuna actuación, dichas viviendas las

²² Para más información consúltese: Corte Constitucional. Sala Sexta. (2006). Sentencia T- 585 Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá.

²³ “Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que, no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos”. Para más información consúltese: Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. (1992). Sentencia T-491 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, Bogotá.

adquieren estas personas mediante la utilización de acciones de tutela que son estudiadas minuciosamente para que se de efectivo este proceso.

Los espacios habitacionales – territoriales proporcionados por el Estado no tienen los mínimos diseños urbanísticos o en caso de tenerlos son bastante precarios haciendo énfasis en que no se trata simplemente de tener un techo sino que esta debe implicar interactuar y convivir en condiciones dignas, además debe garantizar la realización de derechos sociales y colectivos, el aseguramiento de la prestación eficiente, planificada de los servicios públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales requeridos para la vida en sociedad de una persona; ya que a su vez esta debe contar con la “dignidad” que es considerada como el disfrute real de la vivienda, la cual no se puede reducir a una concepción ideal, pues involucra la noción de “habitabilidad”, en condiciones previamente mencionadas como de salubridad, funcionalidad, privacidad y seguridad, comportando responsabilidad de calidad, estabilidad y titularidad por parte del Estado y los urbanizadores.

De igual manera corresponde a las autoridades actuar con especial diligencia, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y teniendo como guía que se trata de resarcir a seres humanos a quienes el Estado les debe especial protección en este caso a la población víctima del desplazamiento forzado ya que se encuentra en una condición de vulnerabilidad extrema, portando de propender por el pronto restablecimiento de una vivienda digna, después de que incumplió su deber de amparar sus derechos fundamentales, garantizarles la indemnidad y asegurarles la paz y el orden justo, por lo cual tuvieron que abandonar abruptamente su territorio como medio de preservar la vida, casi que como único bien remanente.

Como agravante se vulnera el derecho a escoger el lugar de domicilio que si bien ya había sido vulnerado primeramente por los grupos armados ahora será limitado de alguna manera por el gobierno al ser ellos quienes establecen los lugares de construcción de las nuevas viviendas, quién debería establecer políticas que garanticen la seguridad y permitan el retorno; pero al no tener más opción deben acceder a estas aunque con el asentamiento en una vivienda el desplazado no se siente a gusto con el nuevo territorio por lo que será cuestionable que su

condición se termine como lo estipula el decreto 2569 de 2000 apenas el Estado brinde la reubicación pues como hace referencia Augé, M.(2001):

La apropiación de un espacio físico en el nuevo territorio ya sea por la necesidad de huir del lugar propio para buscar seguridad en un espacio social diferente [...], conlleva a producir una carga social-simbólica que, impuesta en dicho lugar, lo apropia legítimamente, por lo cual, aunque la calle, los lotes baldíos y sectores que por sus características pueden ser catalogados como no lugares.

Hay que tener en cuenta que las viviendas entregadas por parte del estado a las personas en condición de desplazamiento forzado son incapaces de cumplir con los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades propias y básicas del ser humano; puesto que no solo se encuentran en áreas geográficamente inadecuadas para la construcción, sino que también al ser otorgadas por el gobierno, esté invierte en ellas los menores recursos posibles para tratar de edificar en masa, es decir, construyen en cantidad mas no bajo los parámetros de calidad necesarios, es por ello que dichas viviendas suelen tener una estructura muy precaria, cosa que en conclusión termina por aumentar el deterioro del desarrollo de la persona que ha sido víctima directa del conflicto armado interno Colombiano, no solo por hecho de que la cohíbe sino que también le cierra a su vez de la posibilidad de llegar a pertenecer, dignamente, a un territorio que nunca será su territorio de origen, su tierra, su identidad, su razón de ser como persona y como ciudadano.

Por todo lo mencionado anteriormente se puede concluir que el derecho a la vivienda digna evidentemente lleva implícito consigo posiciones iusfundamentales, la dignidad humana, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la igualdad, al mínimo existencial, que requiere un ser humano para desarrollar su proyecto de vida. Por lo tanto, la interpretación correcta del derecho a la vivienda debe definirse siempre en criterio de igualdad de condiciones para todas las poblaciones vulnerables, sin distinguir la situación especial de solo unos cuantos, pues no es la situación especial del sujeto lo que realmente determina el alto nivel de vulnerabilidad o afectación, sino el riesgo en el que se encuentren los derechos de esa persona.

Con seguridad la protección de los derechos de los más necesitados se constituye en un compromiso indiscutible de protección inmediata.

REFERENCIAS

1. Augé, M. (2001). Los no lugares. Espacios del anonimato: “*Una antropología de la sobre-modernidad*”. Madrid: Gedisa.
2. Montañez, G y Delgado O, (1998). “*Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional*”. En Cuadernos de Geografía, Vol. VII, (n.o 1-2), p. 120-134.
3. Organización Internacional para las Migraciones, (2014) *Agencia para las Migraciones, Misión en Colombia*, (N.D) recuperado de <http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html>.
4. Ramírez, A. (2014) Desplazamiento interno forzado en Colombia. Producción académica y política pública recuperado de http://www.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRICULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf.
5. Celi, A. (2011). Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y Fundamentales. Recuperado de http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_publico/pdf/9.
6. López, M. (2011) “Examen general de los alcances de la responsabilidad patrimonial del Estado en la política pública de desplazamiento forzado”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 13, Núm. 1, p. 451-487.
7. Correa, R. (1996). Territorialidade e Corporação: Um Exemplo. En: Território: Globalização e Fragmentação. São Paulo, Editora Hucitec, p. 251-256.

8. Pérez, L (2007) et al. “Desarrollo, derechos sociales y políticas públicas”. En Los derechos sociales. Bogotá: De Justicia, IDEP.

9. Saavedra, C, (2010). *Las tinieblas de la Amazonía*. Ministerio de Educación Nacional. Proyecto historia hoy aprendiendo con el bicentenario de la independencia. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-240822_Respuesta_1088.pdf.

10. Wallensteen, P. y Sollenberg, M. (2001) Armed Conflict (1989-2000). Journal of Peace Research. p. 629-644.

11. Deng, M. (1997), elaborado en virtud de la resolución de la Comisión Addendum. Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 54 períodos de sesiones (Documento de Naciones Unidas E/CN.4/1998/53/Add.2).

12. Durán, D (2007). Et. Desplazamiento Forzado en Colombia. Derechos, acceso a la justicia y reparaciones. Colombia: ACNUR, Generalitat, CEDHUL.

13. Palacios, M. (2004). El Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado en Caldas. Manizales: Universidad de Caldas.

14. ONG Techo, (2015) *230.000 bogotanos no tienen una vivienda digna*, recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-techo-dio-conocer-las-cifras-de-pobreza-en-los-barrios-de-la-capital/446677-3>.

15. Robledo, P. (2010) *El derecho a una vivienda digna en el marco de las competencias municipales de ordenación del territorio*. Revista Derecho del Estado, (24), p. 207-231. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/3376/337630234010.pdf>.
16. Naciones Unidas (1996), Derechos humanos, éxodos masivos y personas desplazadas. Informe del Representante del Secretario General, D. Francis.
17. Moncaleano A, (2006). *Hábitat y el derecho a la vivienda digna. 1a. ed. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung*, Pontificia Universidad Javeriana. Ed. 21. P.43.
18. Territorio, patrimonio y desplazamiento, (s.f.) Procuraduría General de la Nación, Consejo Noruego para Refugiados, Tomo II, p. 13.
19. Corte IDH (2006). Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Serie C. 148.
20. Constitución Política de Colombia, (1991). Art. 51.
21. Ley 387, (1997). Arts. 12 y 32.
22. Decreto 2569, (2000). Art 12.
23. Colombia, Consejo de Estado (2010). Sección Tercera. Sentencia N.º 03713 Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá.
24. Colombia, Corte Constitucional. (2011). Sala Octava. Sentencia N.º T-530. Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto, Bogotá.
25. Colombia, Corte Constitucional. (1999). Sala Plena. Sentencia N.º T- 444. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, Bogotá.

26. Colombia, Corte Constitucional. (1992). Sala Plena. Sentencia N.º C-574. Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón, Bogotá.
27. Colombia, Corte Constitucional. (2012). Sala Séptima. Sentencia N.º T-245. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Bogotá.
28. Colombia, Corte Constitucional. (2007). Sala Octava. Sentencia N.º T-1017/07 Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, Bogotá.
29. Colombia, Corte Constitucional. (1993). Sala Novena. Sentencia N.º T-124 Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, Bogotá.
30. Colombia, Corte Constitucional. (2002). Sala Séptima. Sentencia N.º T- 881 Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett, Bogotá.
31. Colombia, Corte Constitucional. (1997). Sala Sexta. Sentencia N.º T-172 Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, Bogotá.
32. Colombia, Corte Constitucional. (2006). Sala Octava. Sentencia N.º T-585 Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá.
33. Colombia, Corte Constitucional. (2007). Sala Séptima de Revisión. Sentencia N.º T-016 Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto, Bogotá.
34. Colombia, Corte Constitucional, (2017). Sala Tercera. Sentencia N.º T-035 Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo, Bogotá.